

EL SOCIALISTA

189

Centroamericano



Segunda Quincena
Noviembre 2014

Guatemala: Q 4.00
Honduras: L 12.00
El Salvador: US\$ 0.60
Nicaragua: C\$ 10.00
Costa Rica: ₡ 500.00

"Por la Reunificación Socialista de la Patria Centroamericana"

www.elsoca.org

www.facebook.com/elsoca.org

www.twitter.com/elsocca

GUATEMALA.- IMPORTANTES LUCHAS DE TRABAJADORES DE LA SALUD Y CAMPESINOS



DECLARACIÓN DEL PSOCA SOBRE HONDURAS:

¡¡ ANTE LA SUBLEVACIÓN POLICIAL Y LAS MANIOBRAS DE JOH, EXIJAMOS LA DISOLUCIÓN DE LOS ORGANISMOS REPRESIVOS!!



GUATEMALA.- Quiebre en la recaudación del Estado



EL SALVADOR.- Protestan veteranos del FMLN



HONDURAS.- Alto a la represión en la UNAH

ASCENSO DE LUCHAS DE TRABAJADORES Y CAMPESINOS EN GUATEMALA

Desde inicios del mes de noviembre Guatemala se ha visto sacudida por fuertes movilizaciones de trabajadores de la salud y organizaciones campesinas.

Animada por el éxito obtenido al lograr la derogación de la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales ("Ley Monsanto"), una coalición de grupos campesinos e indígenas ha intentado que el Congreso de la República apruebe algunas leyes en su favor y anule otras que considera dañinas. El primer intento fue en septiembre, cuando presionando mediante fuertes movilizaciones los campesinos intentaron que los diputados aprobaran la Ley de Desarrollo Rural Integral, pero los jefes de bloque los dejaron plantados al no acudir a la cita en que iban a dialogar sobre el tema.

Los compañeros y compañeras de nuevo realizaron fuertes bloqueos de carreteras los días 11, 12 y 13 de noviembre, pero esta vez ni siquiera fueron recibidos oficialmente por los diputados, salvo algunos de bancadas minoritarias que expresaron su solidaridad. Nuestra percepción es que esta lucha campesina está en peligro de llegar a un callejón sin salida. Las leyes que son objeto de la lucha, en especial la de Desarrollo Rural, afectan aspectos estructurales de la sociedad guatemalteca y los intereses básicos de la oligarquía que controla el país. El gobierno y las clases dominantes no están dispuestos a que se repita el triunfo de agosto contra la Ley Monsanto, claramente han dicho que no permitirán que los diputados trabajen bajo la presión de acciones de hecho. Al parecer ya han definido la fórmula: represión en las carreteras y calles, e indiferencia total en el Congreso, hasta vencer el movimiento por cansancio.

Es momento de que el movimiento campesino reflexione y defina un cambio de táctica. Falta incorporar a otras organizaciones campesinas de peso para lograr una mayor fuerza; por ejemplo, hasta donde sabemos no estuvo presente Codeca, que ha realizado importantes luchas por la nacionalización de la industria eléctrica. El conjunto de leyes en cuestión puede ser parte de un plan general de lucha, pero convendría plantear una a la vez, tal como ha sucedido en los hechos, pues la que estuvo en el centro esta vez fue la de Desarrollo Rural, y como sucedió en agosto con la Ley Monsanto. En resumen, frente único de todas las organizaciones indígenas y campesinas, y una nueva táctica; esto implica lograr la solidaridad de otros sectores como estudiantes universitarios, y los trabajadores públicos que también se están movilizandando contra el gobierno.

En el caso de los trabajadores de salud, desde inicios de año se han sucedido las luchas contra la crisis crónica de los hospitales y centros de salud. El desastre financiero del gobierno de Pérez Molina ha causado una debacle en el sistema de salud pública que ahora incluye salarios atrasados por varios meses de cerca de 18,000 trabajadores. El principal sindicato de salud, dirigido por el Frente Nacional de Lucha, planteó en las últimas semanas que el Congreso apruebe los Q 4 mil millones en bonos que solicita el gobierno para poder cumplir sus obligaciones, al igual que un mayor presupuesto para el área de salud en el presupuesto gubernamental de 2015. En esto coincide con el gobierno, pero el FNL no debe claudicar ante Pérez Molina.

Lo que no han señalado los compañeros trabajadores de la salud es que la crisis financiera del gobierno se debe en el fondo a la negativa histórica de la oligarquía a pagar impuestos, y a las políticas neoliberales (el TLC con Estados Unidos entre otros) que erosionan los ingresos fiscales del gobierno mediante exenciones de impuestos. La lucha de los trabajadores públicos debe incluir la demanda de crear impuestos directos a la oligarquía, por ejemplo a las ganancias de los bancos y financieras, el cese de los privilegios fiscales a maquilas y empresas de exportación, el aumento de las regalías a las empresas mineras y la revisión de los tratados de libre comercio.

Ante todo, es indispensable la unidad de todos los sectores en lucha contra el gobierno: campesinos, indígenas y trabajadores del Estado en un frente único con un mismo plan unitario de lucha. ■

EL SOCIALISTA
CENTROAMERICANO

ESCA No. 189
Segunda Quincena
de Noviembre 2014

Impresión:
23 de Nov. de 2014

DIRECTOR:

Victoriano Sánchez

CONSEJO EDITORIAL:

Armando Tezucún,
Germán Aquino,
Eduardo Villalobos,
José Manuel Flores Arguijo
(in Memoriam).

DISEÑO Y MAQUETACIÓN:

Ricardo Ruiz

AQUI NOS ENCONTRÁS

www.elsoca.org
facebook.com/elsoca.org
twitter.com/elsoca

Redacción:

elsoca@elsoca.org

Secretariado Ejecutivo:

psoca@elsoca.org

Secciones:

psoca_guatemala@elsoca.org
psoca_salvador@elsoca.org
psoca_honduras@elsoca.org
psoca_nicaragua@elsoca.org
psoca_costarica@elsoca.org

EL SOCIALISTA
CENTROAMERICANO
es una publicación del
PARTIDO SOCIALISTA
CENTROAMERICANO
(PSOCA),
fundado y reconstituido
el día 4 de Abril del año 2009.

Se publica en dos formatos:
una versión digital que se
actualiza diariamente
(www.elsoca.org) y otra
versión impresa que se publica
quincenalmente.

Los artículos firmados no reflejan
necesariamente la opinión
editorial del PSOCA, sino la
exclusiva responsabilidad de sus
autores.



CONTINÚAN AFLORANDO PROBLEMAS EN EL SECTOR SALUD

Por Germán Aquino

El sistema público de salud no tiene el suficiente personal médico y paramédico para satisfacer la demanda, lo cual impacta en la atención y lleva a una sobrecarga laboral del personal. En el Hospital Nacional Rosales la situación se complica más, ya que según Alcides Gómez, secretario general del Sindicato de Médicos del Hospital Rosales, en materia de médicos especialistas el 90% de éstos está contratado solamente por dos o cuatro horas laborales diarias; lo anterior lleva a que los pacientes consideren que los médicos abandonan sus puestos de trabajo para ir a atender sus clínicas privadas y el paciente descargue su inconformidad contra el personal de salud, cuando en realidad es problema del gobierno por no contratar el personal de salud necesario

Por qué se oponen los médicos especialistas a la marcación biométrica

El negarse a la marcación biométrica no es simple capricho de los médicos especialistas del Hospital Rosales, sino que tiene que ver con el tipo de contratación. Al respecto Alcides Gómez secretario general del Sindicato manifestó: "Nos preocupa que solo nos contraten por dos horas diarias, pero hay casos en que una operación se tarda hasta cuatro horas o más y no se nos pagan horas extras. Tampoco no podemos abandonar al paciente y que lo atienda el médico que cambia de turno...El sistema de marcación biométrico es demasiado rígido y no es consecuente usarlo para labores como la medicina." (<http://www.lapagina.com.sv>). Si están contratados por servicios profesionales y marcan tarde la hora de salida por estar realizando un procedimiento este tiempo no le es

tomado en cuenta y tampoco le podría ser compensado dado el tipo de contratación.

Por plazas permanentes en el sector salud

La compra de servicios profesionales a nivel del sector salud es una modalidad que



cada día se va haciendo más común, aunque da ciertas flexibilidades al trabajador, pero atenta contra la estabilidad laboral y le niega muchos derechos. Por ello debemos exigir más contrataciones mediante plazas permanentes, las cuales deben ser dadas según capacidad y por no favores políticos.

Las enfermeras del Hospital Nacional Zacamil a la lucha

En días anteriores, el personal de enfermería del Hospital Nacional Zacamil, con el apoyo de SIGESAL, protestó para exigir el cumplimiento del acuerdo en el que se estableció que acondicionarían un espacio más grande donde las enfermeras del área pudieran cambiarse y asearse entre cada turno. Debido a que el área actual no supera los 1.5 metros cuadrados, en el cual se cambian de ropa un total de 25 mujeres en turnos, para lo que tienen que hacer incómodas esperas. Lo anterior es solo una muestra de la situación por la que pasa el personal de enfermería.

Amenazas de privatizaciones y crisis permanentes en salud

En el contexto de una reunión del Sindicato de Médicos del Hospital Rosales con la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa, el diputado Santiago Flores del FMLN recordó la lucha contra la privatización del sistema de salud, advirtiendo que el peligro de privatización continúa por parte de ciertos sectores, a los que no les interesa mejorar las condiciones hospitalarias, y reconoció que "hay condiciones en los hospitales que hay que mejorar, hay que trabajar para solucionarlas. Sin duda hay necesidad de mejorar el Sistema de Salud, porque está enfermo y hay que curarlo". Mientras, Enrique Valdés, de la derecha arenera, manifestó que "la crisis del sistema nacional es evidente. No es un problema que tiene que ver específicamente con el dinero. El Ministerio de Salud ha tenido un incremento sustancial en los últimos años, recibe el doble del presupuesto". (<http://www.asamblea.gob.sv/noticias/archivo-de-noticias/piden-reformar-la-ley-de-creacion-del-sistema-nacional-de-salud>)

Como bien lo ha señalado el diputado del FMLN, la privatización del sistema de salud está latente, pero esta vez desde los Asociados Públicos Privados defendidos por el actual gobierno, mientras la crisis señalada por ARENA viene desde sus gobiernos, los cuales se roban los pocos recursos asignados para salud.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llama a continuar denunciando las deficiencias en el sector salud y a continuar luchando por mejores condiciones y prestaciones laborales. De igual manera llama a todos los pacientes a organizarse y a luchar junto a las organizaciones de trabajadores de la salud por un sistema salud público gratuito y de calidad para todo el pueblo. ■

DECLARACIÓN DEL PSOCA

¡¡ ANTE LA SUBLEVACIÓN POLICIAL Y LAS MANOBRAS DE JOH, EXIJAMOS LA DISOLUCIÓN DE LOS ORGANISMOS REPRESIVOS! ¡¡ ANTE EL FRACASO DE LA POLICÍA NACIONAL, CONFORMEMOS COMITÉS DE VIGILANCIA Y AUTODEFENSA PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD! ¡¡

El 20 de noviembre del año en curso se dio un inusual hecho que ha sacudido al actual gobierno de Honduras: el presidente Juan Orlando Hernández (JOH) ordenó la separación abrupta del General Ramón Sabillón de su cargo de Director de la Policía Nacional (PN), provocando el amotinamiento de algunos destacamentos, abriendo una crisis política sin precedentes y creando un ambiente de sublevación policial.

Para suavizar semejante decisión, el Ministro de Seguridad, Arturo Corrales Álvarez, destacó la labor de Sabillón, como "un policía insigne" y refiriéndose al motivo de la separación dijo: "Él (presidente Juan Orlando Hernández) ha tomado una decisión dentro de la estrategia para fortalecer la institución..." (La Prensa 20/11/2014).

En esa conferencia de prensa, Arturo Corrales Álvarez también informó sobre los ocho nuevos nombramientos de los jefes de las diferentes dependencias de la Policía Nacional. Esta decisión provocó que el destituido Ramón Sabillón, junto con su comandancia, se atrincheraran en la Sede de Casamata, Tegucigalpa, donde se mantienen hasta el día de hoy sábado, presionando para conversar directamente con JOH, quien se encuentra fuera del país. Dentro de las exigencias que hace Sabillón junto a su comandancia está: la destitución inmediata del Ministro de Seguridad y el Director recién nombrado junto a sus comandantes, aumento salarial para toda la policía.



Este ha sido el remezón más importante contra los mandos de la Policía Nacional, una institución desprestigiada, inepta y corrupta. La sociedad hondureña reclama cambios a gritos, porque se ha demostrado que los mandos de la Policía Nacional están vinculados al narcotráfico y al crimen organizado. En su afán de imponer la supremacía de la nueva Policía Militar del Orden Público (PMOP), JOH se ha visto obligado a tomar medidas contra los altos mandos de la Policía Nacional, desatando la crisis actual.

Corrupción e impunidad en la Policía Nacional y Fuerzas Armadas

La Fuerza de Seguridad Pública (FUSEP) se desligó del mando militar y pasó al mando civil en 1997, bajo el gobierno de Carlos Roberto Reina (1994-1998). En 1998 bajo el gobierno de Carlos Flores, se aprobó la nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional. Desde su creación,

la Policía Nacional ha venido involucrándose en constantes actos de corrupción, sicariato, extorsión, secuestro y sobornos permanentes. El caso más emblemático de esta descomposición policial sucedió en octubre de 2011, cuando varios policías asesinaron a mansalva a varios jóvenes, entre ellos al hijo de la Rectora de la UNAH.

Estos agentes estaban asignados a la Posta de La Granja, desde donde se escaparon y actualmente se encuentran prófugos tres de ellos. Al respecto, Arturo Corrales diría "...que la Unidad Metropolitana de Policía (UMEP) número tres o Posta de La Granja estaba contaminada por tres diferentes grupos convergentes del crimen organizado, lo que conllevó al cierre permanente de la misma..." (El Tiempo (08/09/2014).

Una constante de los últimos años es la impunidad permanente de los miembros de la Policía Nacional y de las FFAA involucrados en hechos delictivos. La ola de violencia que desangra a Honduras, convertido en el país más violento del mundo, tiene su origen la explotación, pobreza y marginalidad social, pero esta situación se ha agravado por el hecho de que los altos mandos de las FFAA y la Policía Nacional han sido denunciados por sus vinculaciones al crimen organizado.

Otro caso emblemático, pero que involucra a militares de las Fuerzas Armadas (FFAA) es el asesinato a



mediados del 2012 de Ebed Haziel Yánez Cáceres quien tenía 15 años de edad. Este hecho no tuvo la cobertura que tuvo el asesinato del hijo de la Rectora, sin embargo puso en evidencia que tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas son órganos represivos del Estado, extremadamente corruptos y vinculados al crimen organizado, que están en condiciones de ejercer su "poder" sin importar lo delictivo de la acción.

El Golpe de Estado potencializó a las Fuerzas Armadas y la militarización de la sociedad

Si bien es cierto que a las FFAA se les quitó poder desde el gobierno de Reina mientras se profesionalizaba y se impulsaba a la PN, también es cierto que estas dos instituciones desde siempre se han visto involucradas en actos delictivos, que siempre justifican en que no era el proceder de las respectivas instituciones, sino más bien casos aislados de individuos delincuentes.

Pero el golpe de Estado del 2009, dejó al descubierto que estos órganos represivos sirven a los intereses de la burguesía y oligarquía del país. Las violaciones a los derechos humanos contra los miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) fueron constantes en los siete meses del gobierno de Michelleti y se profundizaron durante los cuatro años del gobierno de Porfirio Lobo.

El agonizante régimen del bipartidismo (Partido Nacional y Partido Liberal) ahora liderado por el Partido Nacional ha tenido una estrategia desde el Golpe de Estado, para contener el descontento popular: reorganizar y potencializar a las FFAA.

Las enormes movilizaciones dirigidas por el FNRP y el levantamiento popular en los barrios y colonias en septiembre del 2009, demostró la vulnerabilidad de las FFAA y la PN ante una probable insurrección popular.

Los tropiezos de JOH

Han sido varias las instituciones policiales militares creadas desde Porfirio Lobo hasta JOH, siendo la Policía Militar del Orden Público (PMOP) la que más controversia ha generado. Esta fue creada, con el apoyo de los liberales, antes de las elecciones generales de noviembre de 2013, siendo un punto de campaña de a favor de JOH. Sin embargo, la creación de este híbrido (policía militarizada), nuevamente ha generado controversia, conflictos, roces a lo interno de la PN.

Por ello, JOH ha insistido en otorgarle Rango Constitucional a la PMOP, ya que "Es una necesidad para el Estado de Honduras que el Congreso Nacional (CN) debata y si es el caso apruebe o desapruebe en función de lo que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad

No obstante, las contradicciones políticas afloran dentro del Congreso Nacional que no es controlado plenamente por el Partido Nacional. JOH no ha logrado obtener la mayoría calificada dentro del Congreso Nacional, para otorgarle el rango constitucional a la PMOP. Los diputados de los partidos Libertad y Refundación (LIBRE), Liberal (PL) y Partido Anti Corrupción (PAC) se han pronunciado en contra de otorgarle rango constitucional a la PMOP, ya que implicaría una mayor militarización de la sociedad.

El partido LIBRE emitió una declaración en la que "se pronuncia ratificando su posición en el sentido de que las Fuerzas Armadas deben colaborar en casos de emergencia con la Policía Nacional en el marco de la Constitución, pero NOS MANIFESTAMOS EN CONTRA de que la Policía sea militarizada o sustituida como se pretende hacer con la Policía Militar (...)"

Mauricio Villeda, dirigente del PL, declaró "...Cuando se creó la Policía Militar se fundó como una rama más de las Fuerzas Armadas de Honduras las cuales están a nivel constitucional y por consiguiente no hace falta que la PMOP esté

bajo ese rango", "... así que sería un error volver a tener una Policía Militar, como en el pasado". (La Tribuna, 22/11/2014).

Salvador Nasralla, dirigente del PAC, sacó un pronunciamiento crítico el que en su partes fundamentales expresa: "(...) 3.- Condenamos de manera irrestricta, las intenciones del gobierno de la Republica de pretender imponer e institucionalizar constitucionalmente, una fuerza militar armada paralela a las Fuerzas Armadas de Honduras, denominada para sus intereses como Policía Militar de Orden Público, en detrimento de la institucionalidad de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, ya que ambas con el apoyo necesario y obligatorio del Gobierno pueden desarrollar las funciones que se pretende atribuir a esta nueva Fuerza Militar,



Juan Orlando Hernández condecorando al General Sabillon

aspira como mecanismo para ser más efectivos a fin de recuperar la paz y la tranquilidad". (La Prensa (10/11/2014).

JOH ha pretendido potencializar la PMOP dentro de la estrategia de combatir el crimen organizado, contener la ola de asesinatos, creando condiciones políticas para imponer su reelección y la hegemonía del Partido Nacional, al mismo tiempo que se siembra la ilusión de que se combate la corrupción dentro de la PN.

Esta estrategia coincide plenamente con el recientemente aprobado plan de "Alianza para la Prosperidad" de los países del triángulo Norte de Centroamérica, impulsado y financiado por el gobierno de los Estados Unidos, cuyos embajadores especiales cada vez que visitan Honduras exigen cambios en el aparato policial.

que ante los antecedentes expuestos, únicamente serviría en el futuro como una Fuerza represiva contra el pueblo ante los deseos continuistas del Partido Nacional (...)” (21/11/2014).

Las limitaciones de la oposición burguesa

Indudablemente, los partidos de la oposición burguesa (LIBRE, PL y PAC) están intentando pescar en río revuelto. Esta oposición es coyuntural y sumamente contradictoria. En realidad no les preocupa el futuro de la PMOP y de la PN sino el hecho que JOH logre aparecer ante el pueblo como el presidente que devolvió la ansiada paz y tranquilidad. Todos manifiestan un temor latente sobre el supuesto deseo de continuismo de JOH. Por un lado declaran que felicitan a las FFAA por contribuir a la seguridad y por otro dicen temer la militarización. Este doble discurso tiene el objetivo de crear complicaciones al gobierno de JOH para obligarlo a negociar el reparto de cuotas de poder.

El error de la oposición burguesa es creer que, con ese tipo de presiones dentro del Congreso Nacional, lograrán frenar el proyecto bonapartista de JOH. El único camino que queda para frenar el continuismo del Partido Nacional y la posible reelección de JOH es través de la lucha y la movilización popular

Algunos intentan pintar a la PN como la “policía buena”, y la PMOP como la “policía mala”. Toda policía es represiva y enemiga de los trabajadores y del pueblo, porque defiende el orden burgués.

La sublevación de los altos mandos y los derechos de los policías de base

Los oficiales destituidos de la PN han levantado también la consigna de aumento salarial para todos los policías, en un esfuerzo por mantener la unidad de sus efectivos.

Pero la actual sublevación de los altos mandos es diferente a la lucha emprendida por los policías de base en abril del año 2013, cuando unos 2,500 policías de la escala básica de siete distritos de Tegucigalpa se fueron a paro de brazos caídos reclamando aumento de salarios.

Los policías de la escala básica, como cualquier trabajador son explotados, y reciben miserables salarios, a diferencia de los altos mandos y los intermedios que reciben mejores prebendas y salarios muchos mayores. Defendemos los derechos laborales de los policías de base, incluido el derecho de sindicalización,

de LIBRE y el PAC, la disolución inmediata de los cuerpos represivos del Estado, porque se ha demostrado la vinculación de estos con el crimen organizado.

La sociedad no puede quedar acéfala. Los únicos que pueden garantizar el orden y la seguridad en los barrios, en las ciudades, pueblos y comarcas, son los propios ciudadanos armados y organizados. Debemos retomar el ejemplo de las “autodefensas” de muchas ciudades de México, donde se demostró que la milicia de ciudadanos armados con palos, escopetas y machetes fueron los únicos capaces de contener las bandas del crimen organizado.

Llamamos a los trabajadores y al pueblo de Honduras a repudiar las maniobras del presidente Juan Orlando Hernández, que tiene el claro objetivo de imponer



su proyecto bonapartista y de hegemonía del Partido Nacional, a rechazar la impotencia de los partidos de la oposición burguesa que no tienen una posición clara y que solo persiguen negociar cuotas de poder, mientras la inseguridad desangra a la sociedad hondureña.

pero repudiamos la conspiración de los altos mandos.

Por la construcción de Comités de Seguridad y Autodefensa de los barrios y colonias

Hasta el momento, tanto las FFAA como la PN y ahora la PMOP han demostrado su incapacidad para garantizar la seguridad de los ciudadanos, que a diario son asaltados, extorsionados o en el peor de los casos asesinados.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llama a los trabajadores de Honduras a exigir a los diputados del Congreso Nacional, especialmente a los

Llamamos a crear Comités de Vigilancia y Autodefensa de Barrios y Colonias, los únicos organismos que garantizarán seguridad y protección.

Centroamérica, 22 de noviembre de 2014.

Secretariado Ejecutivo
Centroamericano (SECA)

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) ■



EL QUEBRE DE LA RECAUDACIÓN DEL ESTADO BURGUÉS

Por Juan P. Castel

“Los hombres han sido siempre, en política, víctimas necias del engaño ajeno y propio, y lo seguirán siendo mientras no aprendan a descubrir detrás de todas las frases, declaraciones y promesas morales, religiosas, políticas y sociales, los intereses de una u otra clase”.

Vladimir Ilich Lenin.

Nuestra burguesía, un conglomerado heterogéneo – alejado del monolitismo de la casta criolla colonial a la que debe su origen– ha demostrado con el tiempo, su poco o nulo interés por la institucionalidad pública, cuando se trata de pagar y hacer efectivo el régimen impositivo (los impuestos), el cual ellos, como los viejos consortes criollos, son reticentes a pagar. En un país donde el secreto bancario domina las relaciones de sus exiguos especuladores y la condonación de impuestos –de mano de los gobiernos de los empresarios al mando de Oscar Berger y Álvaro Colom– a los llamados “grupos económicos” del país se ha vuelto con el tiempo la política de la fracción burguesa que hace gobierno en el cada vez más ingobernable Estado guatemalteco.

Los detentadores de la renta nacional han hecho oídos sordos a un problema que tiene su origen en los gobiernos anteriores al de los actuales “patriotas”. Por su lado también han ignorado los comentarios hechos por los representantes de los órganos de control burgués internacional. “En la evaluación efectuada a Guatemala por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en julio pasado, resaltó que existe riesgo si no se logran aumentar los recursos financieros, ya que provocaría tensiones importantes que podrían desestabilizar la macroeconomía” (Prensa Libre 10.11.14). A la delicada situación del actual gobierno y del aparato estatal y su debido funcionamiento, se espera que el congreso apruebe el endeudamiento de las arcas públicas por un estimado de

Q14.3 millardos, que vendrían a formar parte del presupuesto ordinario de la nación para el 2015, que ronda los Q71.8 millardos.

Ante el posible incremento de la deuda del país, que rondaría en un 2.5% de Producto Interno Bruto (PIB), el representante del Comité Coordinador



de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) Hermann Girón dijo: “debería aprobarse en cifras menores a las que se presentaron en el anteproyecto, para no superar el déficit que se fijó como aceptable y no sobrepasar el dos por ciento del PIB” (El Periódico 11.11.14).

Fuera de los problemas que la falta de liquidez le genera a los grandes consorcios comerciales y a los especuladores financistas, los verdaderos problemas ya se hacen sentir en los servicios públicos que el Estado debe brindar a la sociedad; dándose los casos de impago de obras que se han quedado varadas y municipalidades que solo han podido ejecutar la mitad del presupuesto asignado para el 2014. Hay que hacer especial énfasis en los ramos de salud, educación y demás servicios básicos, que se han visto seriamente mermados.

“Crisis financiera del Estado deriva en paros y peticiones” esta es la primera plana del matutino de mayor tiraje en la república (Prensa Libre 12.11.14). Por su

parte los sindicatos blancos (STEG-FNL) y sus líderes oportunistas han optado por presionar al gobierno en los hechos para que apruebe los bonos del tesoro que ayudarían a terminar al gobierno el año fiscal 2014. Las bancadas en el congreso han decidido aprobar el presupuesto 2015, pero negociando para que el gobierno patriota reduzca el gasto, todo esto, junto con la presión de las cámaras de la burguesía se ha vuelto un verdadero embrollo para el gobierno.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) consideramos que el impago de los servicios públicos de primera necesidad no puede negociarse o estrangularse, ni en las actuales condiciones, ni verse disminuidos en el presupuesto del año 2015. Por lo tanto hacemos notar las argucias por las cuales la burguesía embauca al pueblo. Ninguno

ha hablado que la brecha fiscal (que ronda ya los Q2.3 millardos) no es causada por la clase media o los sectores populares, que en su generalidad pagan los impuestos; esta brecha se origina en una reforma fiscal inocua, hija de un gobierno y una fracción burguesa incapaz de hacerle frente a los grandes capitales guatemaltecos, que son reticentes a pagar impuestos. Los movimientos sociales de la ciudad y el campo deben seguir presionando al gobierno, para que acabe con la condonación de impuestos, que le debe prioridad al gasto público nacional, por sobre el pago de la deuda exterior a los grupos usureros del capitalismo internacional. Un impuesto sobre el capital de los grandes grupos financieros es necesario, cabe recordar que a nivel mundial desde la crisis inaugurada en el 2008, la única rama de la economía que no ha dejado de reportar ganancias, son los consorcios financieros y la banca guatemalteca no es la excepción. ■



MOVILIZACIONES DE CAMPESINOS Y TRABAJADORES DE SALUD ESTREMECEN AL PAÍS

Por Armando Tezucún

La semana del 10 a 14 de noviembre organizaciones de campesinos, pobladores y de trabajadores de la salud salieron a las carreteras y calles de las ciudades a protestar y exigir sus demandas al gobierno. En el caso de los campesinos, los bloqueos y protestas fueron continuación de las movilizaciones iniciadas en agosto por la derogación de la Ley de Protección a las Obtenciones Vegetales, que culminaron con un triunfo al lograr la eliminación de dicha ley. A mediados de septiembre los compañeros de nuevo tomaron carreteras e hicieron marchas en la capital exigiendo la aprobación de unas leyes y la derogación de otras. El 18 de septiembre, en el Congreso algunos diputados apoyaron a los campesinos proponiendo la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural, pero el intento fracasó debido a que la Junta Directiva rompió el quórum. Los partidos burgueses en el parlamento aprovecharon para desviar las protestas proponiendo una mesa de diálogo para discutir reformas a dicha ley, pendientes desde 2012, con el resultado de que los jefes de bloques dejaron plantados a los representantes campesinos el 22 y 24 de septiembre.

En referencia al desaire hecho por los diputados a los campesinos, el dirigente Aparicio Pérez declaró: "Es una falta de respeto y una payasada lo que hacen estos partidos políticos en el Legislativo, ya que solo responden a los intereses de los ricos y de las grandes empresas nacionales y las transnacionales" (Prensa Libre 12/11/14).

A partir del 11 de noviembre los compañeros retomaron las protestas exigiendo la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral, la Ley de Radios Comunitarias, la Ley de Monumentos Sagrados; además la derogación de la Ley de Títulos y la Ley de Telecomunicaciones, y la no aprobación de la Ley de Inversión y Empleo.

En el caso de los trabajadores de la salud, desde el 6 de noviembre los paros en los centros hospitalarios y de salud se extendieron por todo el país. Los compañeros exigen el pago de sueldos atrasados a casi 18 mil trabajadores y el abastecimiento de medicinas, insumos y

equipo a los hospitales, que se encuentran dramáticamente desabastecidos.

La Ley de Desarrollo Rural Integral

Una de las principales leyes cuya aprobación demandan los campesinos es la Ley de Desarrollo Rural Integral, que ingresó al Congreso en mayo de 2005. Esta es una ley no confiscatoria, realizable dentro del marco de la economía de mercado y que en realidad no atenta contra los latifundios. Sin embargo, ha sido adversada encarnizadamente por la oligarquía y sus representantes en el Congreso. La ley recibió un dictamen favorable en el año 2009, pero ha permanecido engavetada desde entonces. En marzo de 2012 las organizaciones campesinas realizaron una multitudinaria marcha para demandar la aprobación de la ley, y otras exigencias, pero después de infructuosas reuniones, el gobierno logró que la movilización quedara en nada. En noviembre de ese año, bajo la presión de fuertes movilizaciones campesinas, el gobierno trató de presentar la ley ante el pleno del Congreso, pero una vez más los diputados la enviaron a discusión. En septiembre de este año los diputados engañaron de nuevo a los campesinos haciéndoles creer que la aprobarían.

Inician las movilizaciones

El lunes 10 de noviembre trabajadores de la salud y el Frente Nacional de Lucha empezaron los bloqueos en la carretera a El Salvador en el cruce a Cuilapa, Santa Rosa, mientras continuaba el cierre de las consultas externas en varios hospitales. En Huehuetenango los compañeros realizaron una marcha de protesta. Luis Lara, dirigente del principal sindicato de salud declaró: "Estamos pidiendo al Congreso que despolitice el problema de la salud y que lo vea con una mirada de solidaridad, porque no se puede jugar con el hambre de los trabajadores y tampoco se puede jugar con la vida de los niños y las mujeres" (Diario La Hora 12/11/14).

A partir del martes 11, cientos de compañeros pertenecientes a las organizaciones indígenas y campesinas iniciaron los bloqueos de carreteras en al

menos 21 puntos, que se sumaron a los realizados por compañeros de salud. A la vez, en la capital representantes de varias organizaciones, entre las cuales destacan el Comité de Unidad Campesina, el Comité Campesino del Altiplano, el Consejo de Autoridades Ancestrales, compañeros de la resistencia de La Puya, y la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib´ Kej, con el apoyo de otros grupos y estudiantes universitarios (alrededor de 200 personas), organizaron un plantón frente al Congreso de la República, exigiendo entrevistarse con los diputados para plantearles las demandas en torno a las leyes mencionadas. Los compañeros mantuvieron el plantón día y noche frente al Congreso hasta el jueves 13.

En algunos lugares la población agregó otras demandas a las planteadas por los campesinos y trabajadores de salud, como en Totonicapán, donde se protestó contra los cobros elevados por el servicio de energía eléctrica que realiza la empresa Energuate, además de que se manifestó la oposición a la instalación de torres de cableado eléctrico. En San Cristóbal Totonicapán y San Jerónimo, Baja Verapaz, se sumaron a los bloqueos y protestas campesinos pertenecientes al programa de incentivos para pequeños poseedores de tierras de vocación forestal o agroforestal, exigiendo al gobierno el pago de incentivos forestales por Q 21 millones, que adeuda a unos 18 mil beneficiarios de todo el país.

La burguesía exige al gobierno represión

Ese mismo martes, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) planteó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para que ésta ordenara el desalojo de los bloqueos. La CC otorgó el amparo a los empresarios y ordenó al Ministerio de Gobernación y a la PNC liberar las carreteras. El presidente del Cacif, Hermann Girón argumentó: "Lo que más preocupa es que en los pasos bloqueados participan entre 15 y 20 personas, obstruyen el paso de cientos y miles de personas en las carreteras del país, afectan la oportunidad no tanto



de los grandes empresarios, sino de los pequeños empresarios y agricultores” y “Creemos que bloqueos extendidos como los que han anunciado algunos líderes irresponsablemente son un gran daño para la sociedad, principalmente para los pequeños y medianos empresarios y agricultores” (Prensa Libre 12/11/14). Como siempre, los capitalistas se escudaron tras la cantaleta de que las protestas ponen en peligro empleos: “Nos preocupan los miles de empleos que se ponen en riesgo con estas acciones”, dijo hipócritamente Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro, y “Lo que más nos preocupa son los empleos que están en riesgo con el bloqueo de carreteras”, gimió Hermann Girón (Prensa Libre 14/11/14).

Al empezar la intervención de la policía, en algunos lugares se dieron enfrentamientos, en especial en el Km. 51 de la ruta al Atlántico, en Sanarate, El Progreso, y Santa María Xalapán, Jalapa, con el resultado de cinco policías heridos de bala y uno atacado con un machete. Los compañeros campesinos, conociendo los métodos violentos que usa la PNC, decidieron llegar a los bloqueos preparados para enfrentarlos. Para el miércoles 12 los agentes represivos habían desalojado 7 puntos de bloqueo, aunque las acciones de protesta continuaban en al menos nueve lugares. A pesar de los desalojos, los compañeros volvían a ocupar los lugares. Según las informaciones de los diarios, las acciones de desalojo dieron como resultado 8 policías heridos, un campesino fallecido (Luis Alfredo Vásquez Cruz) y 16 manifestantes detenidos.

La dirigencia magisterial se presenta al Congreso

Mientras campesinos, pobladores y trabajadores de la salud se continuaban movilizand, el dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (Steg), Joviel Acevedo, llegó al Congreso a reunirse con los jefes de bloque, a quienes demandó la aprobación de los bonos del tesoro por Q 4 mil millones y el presupuesto del gobierno para 2015. Acevedo amenazó con sumarse a las protestas si los diputados no aprueban ambas cosas: “Nosotros venimos a proponer, responsablemente, antes de que el magisterio salga a manifestaciones, a solicitar que aumenten el presupuesto, así como proponer al Congreso, porque al fin de cuentas ellos son los que aprueban las leyes, que se

mejore la estrategia de recaudación fiscal, porque hay crisis en todo el Estado, y una de ellas es el magisterio”, y exigió “Q 15 mil millones para el Ministerio de Educación” en el presupuesto 2015 (Siglo XXI 12/11/14). Sin embargo, pese que Acevedo prácticamente intercedió por el gobierno ante los diputados, éstos no se inmutaron y continúan su negativa a aprobar los bonos.

El jueves 13 los trabajadores de salud y el Frente Nacional de Lucha realizaron una multitudinaria marcha partiendo de la sede del Ministerio de Salud hasta llegar al Congreso, donde coincidieron con las organizaciones campesinas que mantenían su plantón. El dirigente de salud Luis Lara declaró que exigirían a los diputados la aprobación de los Q 4 mil millones en bonos que solicita el gobierno, y una ampliación presupuestaria de Q 212 millones en el área de salud, para que se solucione la crisis en los hospitales y se pague los sueldos atrasados a los trabajadores.

El Congreso ignora a los campesinos

En el Congreso las demandas de las organizaciones campesinas en torno a las leyes no lograron respaldo. Según dirigentes, algunas bancadas minoritarias como Winak, Urng, Encuentro Por Guatemala y algunos diputados de la Une los respaldan, pero el resto de bancadas muestra un rechazo, velado o abierto, en especial a la Ley de Desarrollo Rural Integral. En cambio, los jefes de bloques parlamentarios recibieron a los representantes de los trabajadores de salud.

Al finalizar el día 13 de noviembre, las organizaciones campesinas decidieron suspender las acciones de bloqueos y el plantón frente al Congreso, a pesar de que no lograron ser escuchados.

Tanto el Frente Nacional de Lucha como las organizaciones campesinas, por aparte, anunciaron que realizarán asambleas para decidir las acciones que realizarán a continuación.

Las autoridades de salud reaccionan El Ministerio de Salud anunció que el 12 de noviembre empezó el pago de salarios atrasados a los trabajadores, utilizando Q 107 millones trasladados por el Ministerio de Finanzas, pero un ritmo extremadamente lento y no a la totalidad de empleados. De igual manera anunció acuerdos con las empresas farmacéuticas para que reanuden el abastecimiento de

insumos, como resultado de una reunión encabezada por la vicepresidenta Baldetti. Según el acuerdo alcanzado, de una deuda de Q 557 millones, el gobierno realizará dos pagos durante el mes de noviembre, que sumarán Q 100 millones; sin embargo, el total de la deuda será cancelado hasta en el primer cuatrimestre de 2015. El director de la gremial de Farmacéuticos dijo que después de los primeros pagos podrían empezar a proveer medicamentos y materiales, pues por el momento no cuentan con recursos.

El Sindicato ha dicho que no abandonará las acciones de protesta hasta que se satisfagan las demandas por completo. El 18 de noviembre, 500 trabajadores de la salud de Huehuetenango salieron de nuevo a protestar exigiendo el pago de 8 meses de salarios atrasados y el abastecimiento de medicinas e insumos. Las consultas externas continúan carradas en 7 hospitales del país.

Replantear la lucha campesina

En cambio, las organizaciones campesinas se han topado con una negativa total. No se trata de una postura racista de parte de los diputados, como piensan algunos compañeros dirigentes campesinos. Como hemos señalado desde 2012, el gobierno ha logrado algunos acuerdos con los principales sindicatos de educación y salud, porque las demandas de estos sectores dependen del presupuesto del propio gobierno y el Estado es el patrono de los maestros y salubristas. Sin embargo, las demandas de los campesinos tienen que ver con aspectos estructurales sensibles para la oligarquía y la gran burguesía (acceso a la tierra, avance despiadado de los cultivos de agroexportación y agroindustrias, construcción de hidroeléctricas y minas); y en estos puntos las clases dominantes guatemaltecas no están dispuestas a ceder ni un milímetro.

Serán necesarias nuevas movilizaciones, buscando una nueva forma de plantear las demandas, quizá una ley a la vez, para lograr una unidad semejante a la que se logró contra la “Ley Monsanto”. Hace falta incorporar a otras organizaciones campesinas que también tienen peso, y generar mayor solidaridad de parte de otros sectores, como el movimiento estudiantil universitario, y los mismos trabajadores de la salud. ■



ACTUALES TENSIONES GEOPOLÍTICAS EN EL MUNDO

Por **Leonardo Ixim**

Un otoño caliente regalo de Vladimir Putin, así ha sido calificado por columnistas de diarios burgueses europeos el clima de tensión entre Rusia y occidente; todo esto debido a los constantes movimientos de tropas rusas, sobre todo en el Mar Báltico, y de la OTAN a causa del conflicto en Ucrania, situación que culminó con la salida intempestiva de Putin de la cumbre del maltrecho G-20 en Brisbane Australia.

De esta forma el naciente imperialismo ruso busca pararse ante los agravios de EU y Europa, tras la disolución de la URSS y el culmen del retorno capitalista, al cercenarla de sus cordones de seguridad garantizados con la victoria soviética en la segunda guerra mundial, asegurados tras los acuerdos de Helsinki en 1971 y la Ostpolitik alemana de Willy Brant.

In situ en Ucrania

Después del derrocamiento de Yanukóvich, la instauración de un gobierno provisional primero dirigido por el todavía primer ministro Arseni Yarseniuk, las posteriores elecciones presidenciales que ganó el oligarca Piotr Poroshenko y la reciente elección para la Rada Suprema (parlamento), el partido del primer ministro consigue levemente la mayoría sobre el del presidente, en tercer lugar quedan los partidarios de Yanukóvich y muy abajo quedan otros grupos conservadores, como el de la ex primera ministra Yulia Timoshenko y una expresión de extrema derecha; afuera quedaron otros partidos abiertamente nazis.

Tal situación refleja que tras los incidentes del Maidan -la revuelta que derrocó a Yanukóvich- y el ascenso de lo que la prensa occidental denomina

partidos pro europeos, el descontento entre los mismos sectores partidarios de las protestas (profesionales, capas medias, campesinos) que visualizaron el ingreso a la Unión Europea y a la OTAN como salida a la crisis que dejó el derrocado gobierno, ahora muestran su desconcierto, sobre todo por las políticas de ajuste implementadas por Poroshenko, las promesas vacías de parte de la UE por 70 millones de euros, que junto al FMI exigen más recortes sociales, al grado que el número de votantes de esta elección fue menor que en las presidenciales. Pese

de masas como a los intereses de Moscú

En este escenario Ucrania se encuentra endeudada tanto con Alemania como con Rusia. La no celebración de elecciones en estas autoproclamadas repúblicas y la realización de otras que revalidaron a los actuales dirigentes de RPD y la RPL, ha puesto en crisis al gobierno de Kiev. Estados Unidos por su parte trata por todos los medios evitar que se repita lo de Crimea o algo parecido en el este ucraniano, con el único fin estratégico de lograr aislar a Rusia.

Berlín, aunque aliado a EU y

coparticipe de las sanciones que han dañado la economía rusa, tiene sus límites en cuanto a la presión que puede ejercer sobre Rusia, tanto por su dependencia del gas y del mercado ruso para sus empresas, como por sus horizontes futuros a partir de la ruta de la seda del siglo XXI y la creación de una hipotético eje Beigin-Berlín-Moscú, algo que por supuesto asusta a



a todo, la población ucraniana del oeste, culturalmente más cercana a Europa, sigue considerando mejor el neoliberalismo rapaz de Bruselas que el autoritarismo estilo Putin.

A la par del Maidan, estalló la guerra en la región este, Donestk y Lugansk, desangrando al país, provocando 500 mil desplazados y una cantidad elevada de muertos y heridos. Recordemos que la población de estas provincias cercanas culturalmente a Rusia, proclamaron sus propias Repúblicas Populares, hoy denominada Novorrosija en un fuerte movimiento de masas conformado por una buena parte del proletariado ucraniano, pues son regiones industriales que aportan el 16 % del PIB, imponiendo a líderes que responden tanto a la presión

la oligarquía transatlántica y a las plazas financieras de Wall Street y de la City de Londres, que buscan fortalecer al Dólar y debilitar la competitividad de las empresas alemanas.

Además con la participación del SPD en la gran coalición junto a la canciller Angela Merkel y su partido la CSU, estarían por revitalizarse la Ostpolitik y junto a Putin, han presionado tanto a Kiev como a los independentistas del este, vía el acuerdo de Minsk, a un cese al fuego. Situación constantemente violada, sobre todo por el ejército ucraniano, que en su operación denominada antiterrorista apoyada por los servicios secretos gringos, operativizada por batallones de la Guardia Nacional conformados por muchos militantes nazis, han martirizado



a la población rusa ucraniana.

El conflicto parece estar en un punto muerto; en la capital de la RPD la ciudad de Donetsk situada en el frente de batalla, el aeropuerto y el popular club de fútbol Donetsk FC, son los puntos disputados. Más al sur el puerto de Mariupól, en el Mar Negro, sigue controlado por los ucranianos, dándose una constante represión por elementos fachas a los militantes independentistas. En ese escenario, al interior de las milicias independentistas ha habido desavenencias entre los partidarios de la cautela utilitaria de Moscú y los que se oponen a la federalización - a r g u m e n t o presentado por Rusia como salida, el cual pierde cada vez más fuerza- y apoyan la independencia



total, donde el escenario de inclusión a Rusia no está totalmente dado.

Posiblemente Rusia le apostaría a una dejar en el limbo a Novorossiya tal como las regiones de Alto Karabaj en Azerbaijan o de Transdstier en Moldavia, eso debido a las victorias militares de los independentistas logrando detener el avance de las tropas ucranianas. En caso de que Ucrania aceptara su retirada militar, algo que ya mencionó públicamente el ex premier soviético Gorbachov, occidente no reconociera a estas repúblicas tal como el caso de Abjasia y Ossetia del Sur, calificándolo de ilegal como el caso de Crimea.

La geopolítica y pleitos comerciales

En el plano comercial también se juegan las fichas y pese a las sanciones europeas sobre Rusia, ésta le apostaría a un acuerdo comercial y en materia de seguridad entre la UE y la recién creada Unión Eurasiática convertida en unión aduanera. Esto mientras que en el Atlántico se sigue negociando el tratado de libre

comercio entre EU y la UE, el cual muchos sectores empresariales, sindicales y de la sociedad civil europea han rechazado, sobre todo en materia de flexibilización de regulaciones socioambientales y de la creación de tribunales privados al servicio de las trasnacionales que pasarían sobre las políticas y legislaciones internas. Tal situación llegó al grado de que Francois Hollande anunció que Francia

ve con recelo muchos puntos de estas negociaciones.

Francia por su parte mantiene una política independiente en la región del Levante, sobre todo apoyando a Turquía y su infame colaboración con la banda criminal salafista del Daesh, el cual solo ha sido detenido por la heroica resistencia de las y los combatientes kurdos sirios del YPG cercanos al izquierdista y guerrillero PKK que opera en Turquía. Por su parte los bombardeos gringos contra las posiciones islamistas poco han ayudado al YPG, fortaleciendo el accionar del ejército sirio que combate al descompuesto ELS, controlado por facciones moderadas sunnitas que ha canalizado la rebelión siria a sus intereses, logrando legitimar en la población a la dictadura de Bashar Al-Assad.

Por otro lado la política exterior estadounidense es pragmática por naturaleza, pues por un lado fortalece la cooperación militar con Japón y Corea del Sur, busca un acuerdo de libre comercio con todos los países miembros de la APEC excluyendo a China, pero por el

otro trata de llegar acuerdos en lo que respecta al tema ambiental y de respeto a las inversiones con Beigin. China por su parte a pesar de ser rival de EU en el pacifico, le apuesta a seguir manteniendo sus vínculos comerciales con EU.

China además colabora en la tensión por sus constantes ejercicios militares en el Mar de China, afectando sus relaciones con sus vecinos al sur, pero a la vez propuso en la pasada cumbre de la APEC en su capital, otro tratado de libre comercio (FTAAP) con todas las naciones miembros de ese organismo. Este FTAAP es más atractivo para éstas que la propuesta de EU, por la pujanza de la economía china, pese a su relentización, al grado de firmar ya un acuerdo de este tipo con Australia y mantener pláticas similares con Japón, hoy en situación de recesión. Así como la creación de un banco regional asiático de inversiones con un

monto de 50 mil millones de dólares

Por tanto, en la cumbre de Beigin como en la Brisbane del G-20, Rusia y China refrendan el acuerdo de comercialización de gas, firmado hace unos meses entre Xi Jinping y Putin, por el cual Rusia provee a Chica 30 millones de metros cúbicos por año por un valor de 320 millones de euros. Además de acordar que tales intercambios se realizarán en las monedas de ambas naciones. La cumbre del G-20 demostró además las diferencias entre las naciones industrializadas y el Brics, que exigen una reforma a la manera en que se toman las decisiones en el FMI. El Brics por su parte creó un banco de inversiones y un fondo de reserva de divisas que dista mucho de ser alternativa al FMI y al BM. El Brics no es ninguna alternativa anti-capitalista, pero si un competidor al imperialismo hegemónico, pese a que sigue siendo dependiendo tecnológicamente de EU, Japón y Europa. ■

REVUETA DE 1811: “EL PRIMER GRITO DE INDEPENDENCIA” EN CENTROAMÉRICA

Por Maximiliano Cavalera.

El 5 de Noviembre de 1811 es conocido en la historia Salvadoreña como el primer grito de la independencia. En aquel entonces, Centroamérica estaba bajo la égida de la corona española decadente, que se encontraba en ese entonces, en plena lucha por sobrevivir. Hasta la fecha, y como producto de la visión burguesa de la historia, se fue construyendo un mito en torno a los personajes que fueron parte de este proceso, no es de extrañarse, que en aras de construir la identidad nacional, la burguesía haya relatado los hechos acontecidos en San Salvador como una epopeya gestada por las élites ilustradas que lucharon por la igualdad, la libertad y la independencia del despotismo español. Pero el proceso es dinámico, el levantamiento del 5 de Noviembre está determinado por la confluencia de intereses de diversas clases sociales que se alzan en contra del centro de poder constituido por la corona.

La corona española y la colonia.

Mucho se ha discutido sobre el “descubrimiento” de América realizado por Cristóbal Colon. A la fecha está demostrado que América fue descubierta, no una, sino muchas veces. Todo dependía de la óptica del pueblo que realizara el hallazgo, este proceso se dio desde las primeras migraciones provenientes de Asia, hasta el descubrimiento realizado por la Europa ibérica. Las empresas de descubrimiento y conquista de América gestada por los españoles, si bien es cierto, fueron realizadas bajo las formas

de Estado y gobierno feudal, es impulsado por la burguesía y banqueros europeos, estos fueron los que financiaron los viajes de Colon y el gran negocio de la conquista, en sus anales, estaba haciendo su aparición las formas pre capitalistas de producción. Durante la colonia, los españoles afianzan nuevas instituciones de opresión, no



solo sobre los indígenas autóctonos, sino también sobre los negros traídos de África, los mestizos y los mismos españoles nacidos en el continente americano.

El sistema de producción fue desarrollado con instituciones como la encomienda, el repartimiento y en Perú, la Mita. Esto va constituyendo una sociedad altamente estratificada, en donde la cúspide del poder era ejercida por los españoles continentales. En contraposición lo más bajo del sistema de explotación estaban los indígenas y negros, que eran sobreexplotados.

Las reformas borbónicas.

Para 1700 se instaura en España una nueva dinastía. De procedencia francesa, los borbones luchan por centralizar el

poder del imperio español en la nobleza de Castilla en contraposición de la de nobleza de León. Este proceso de centralización del poder buscaba como volver efectiva la circulación de recursos de América y España a la monarquía, las reformas borbónicas serian fundamental para comprender los procesos independentistas en América, ya que, España, siendo consecuente con su carácter de imperio colonial, apoyó el desarrollo del sector externo de la economía de sus colonias (finanzas públicas, minería, comercio y agricultura de exportación), forjando un aura de desigualdades opresión, resentimientos y con la escena tiránica de ver como se producía para el enriquecimiento y esplendor de la aristocracia europea.

Uno de los factores más importantes y que incidirían en el levantamiento de 1811 en San Salvador sería la institucionalización de la producción en Centroamérica en donde esta se encontraba supeditada a las necesidades del comercio español. Esto implicó que las provincias debían producir, no bajo sus necesidades, sino supeditadas a los intereses comerciales de España. Así fue que se institucionaliza la producción de ganado, añil y otros rubros en toda Centroamérica. Las reformas borbónicas acrecientan el saqueo de la metrópoli creando un enfrentamiento económico y social, que ponía de un lado a unos 14,000 españoles peninsulares, frente a más de 6 millones de criollos, mestizos, indígenas y castas.

La concentración de poder.

Este proceso impuesto por los borbones fortalece los centros de poder,



en este sentido la capitania general de Guatemala concentra, no solo el poder político en Centroamérica, sino el monopolio comercial de los productos que salen de la zona. En este sentido, los criollos salvadoreños que producían añil veían como la elite radicada en Guatemala se llevaba una gran parte de sus ganancias por los privilegios impuestos por la corona. Sin duda alguna, se va generando un sentimiento de impotencia para los criollos salvadoreños y centroamericanos, en especial en Nicaragua y El Salvador.

Las cortes de Cadiz y el sueño de inclusión.

Sin duda la revolución Francesa es uno de las principales influencias de la independencia. Las ideas viajan y son asimiladas por las castas criollas de toda Centroamérica, esta tendencia no es fortuita y es producto de las mismas desigualdades generadas por el sistema de explotación.

Estas ideas tienen un empuje, en las guerras napoleónicas y la lucha en contra de la imposición en el trono español de José Bonaparte. La lucha por la expulsión de los franceses, contradictoriamente, trajo aparejado el llamado a constituir las Cortes de Cadis. El 24 de septiembre de 1810, se constituyen las Cortes de Cádiz y, en ese mismo día, se aprueba un decreto en donde adquiere presencia los principios básicos de la futura Constitución: la soberanía nacional y la división de poderes: "Las Cortes de Cádiz estuvieron compuestas por más de 300 diputados, de los cuales cerca de 60 fueron americanos. Una de las conquistas de esta Constitución fue la igualdad de representación y derechos entre los americanos y los peninsulares." (Historia de las ideas políticas en El Salvador, Dr Jorge Barraza)

El negocio del añil.

El añil era el producto por excelencia de algunos productores peninsulares, criollos y mestizos salvadoreños. Los encargados de hacer producir las plantaciones de añil eran los indígenas, estos estaban sometidos al repartimiento y la encomienda, modalidades de explotación propias de la colonia, en la cual el nativo estaba obligado a servir en las haciendas,

casas y obras públicas encomendada por los españoles. El negocio del añil se ve truncado por las guerras napoleónicas, que cortaron el comercio con Europa. Esto provocó una crisis económica en los productores Salvadoreños. A esto se aunó los impuestos que estaban obligados a pagar para sostener la lucha en contra de la ocupación francesa en España. Ambos factores van creando las condiciones para que los criollos salvadoreños deseen la descentralización política y la autonomía de la capitania general de Guatemala. Es decir, se va gestando un sector de los criollos que no desean seguir dejando sus riquezas en manos de ese andamiaje burocrático corrupto.

El 5 de noviembre de 1811 la insurrección fue encabezada por un grupo de criollos en los que se encontraba Manuel José Arce y el sacerdote José Matías Delgado. Los criollos de San Salvador tenían como proyecto político la conformación de un gobierno autónomo y crear un Obispado en la provincia. Los alzados lograron deponer a las autoridades coloniales y nombrar a sus propios dirigentes. Muchos historiadores coinciden en que el objetivo de la insurrección era lograr el resguardo de las armas y doscientos mil pesos que les ayudarían a materializar el proyecto de autonomía. Pero la insurrección, no encontró respaldo en los demás poblados de la intendencia, por lo que la ciudad quedó aislada.

El descontento fue canalizado en contra de la burocracia española en San Salvador: "Como era lógico esperar, dado el abierto antagonismo entre los grupos sociales, la población sublevada fijó como blanco a los españoles y comerciantes, escogiendo sus casas de habitación en San Salvador. En esta situación, el principal inculpado era el intendente, que fue protegido por el gobierno local" (Ídem)

Es en este momento que los intereses materiales de la elite criolla juegan un papel importante en la revuelta, y es que, defendiendo sus intereses materiales y su estabilidad, interceden para que la revuelta transcurra sin trastocar las instituciones del poder político. Contrario a lo que pretendieron hacer creer los historiadores burgueses, los criollos, como lo demostraron en la

independencia de 1821, apostaban por la conservación del aparato de dominación instituido. La única diferencia, es que ellos querían controlarlo para obtener mayores prebendas de la corona. Además de la acción conciliadora de los criollos, es importante destacar que el movimiento fue esencialmente urbano y no incorporó en su mayoría a los estratos más bajos de la sociedad colonial, lo que hubiese incorporado una dinámica diferente al movimiento, es decir, se pudo haber cuestionado el mismo carácter del Estado colonial: "Pese a los tumultos populares, la ciudad fue gobernada durante más de un mes por sus alcaldes, sin embargo no se cometieron excesos ni se atacó a los españoles." (Ídem)

Otras rebeliones

Sin embargo en otras ciudades se suscitaron revueltas que fueron paralizadas por tácticas de las autoridades. Es más, las autoridades de la Capitania General de Guatemala enviaron una misión de índole pacífica para restaurar el orden, llegando a tener resultados importantes, restableciendo el orden social y económico colonial. Al final, ningún criollo fue castigado por la revuelta, sin embargo no pasó lo mismo con los mestizos e indios que participaron en la misma: "las autoridades los trataron con sobrada dureza y fueron condenados a penas de prisión y extrañamiento, unos en San Juan de Ulúa, en Veracruz, y otros, en el Petén, Guatemala." (Ídem)

Un mes después de la insurrección de San Salvador, en la ciudad de León, Nicaragua, habría un nuevo movimiento de lucha, seguido por una insurrección más brava de los criollos granadinos. Al final la oligarquía criolla demostraría ser incapaz de encabezar una verdadera independencia. Hasta el día de hoy seguimos siendo sometidos, esta vez no por el imperio español, sino por el imperialismo norteamericano, nuestros moderno criollo es la burguesía que se conforma con extender sus riquezas bajo la égida imperial, hoy más que nunca es necesario una segunda independencia, y la reconstrucción socialista de Centroamérica. ■

TRAGICOMEDIA DEMOCRATIZADORA DEL SISTEMA ELECTORAL

Por Rael Oshun

El 1 de marzo del 2015 se celebraran las elecciones de diputados, alcaldes y concejos municipales para el próximo período. Esta vez en el escenario electoral se estrena la nueva modalidad del Voto Cruzado, en la cual los ciudadanos votaran si así desean, por candidatos a diputados de diferentes partidos, así como de la lista de independientes no-partidarios.

Estamos a pocos meses de las elecciones; esto podría generar incertidumbre en la población, con el agravante del incremento económico que generará al país. Es así como ARENA está pidiendo un presupuesto de más de cuatro millones de dólares, para capacitar a la población sobre cómo deberá votar.

Desde el inicio casi todos los partidos, a excepción de Arena, mantuvieron una postura crítica a dicha resolución, pero como defensores de la democracia, burguesa han terminado obedeciéndola.

Qué esconde la igualdad en el conteo para los candidatos no partidarios

La sala de lo constitucional nuevamente emite una resolución que busca igualdad en el conteo para los candidatos no partidarios. La Sala declaró constitucional el inciso b del artículo 217 del Código Electoral, pero estableció que "Es constitucional... siempre que se interprete que tanto los candidatos partidarios como los no partidarios podrán

participar en igualdad... especialmente en cuanto se refiere a la forma de presentar sus candidatos y someterlos a votación, como en la forma de realizar el conteo de votos y asignar los escaños conforme al sistema de representación proporcional". Lo anterior alienta las esperanzas de los candidatos no partidarios a lograr un escaño en la Asamblea Legislativa y a invertir más en la campaña electoral, siendo una herramienta más utilizada por la rancia derecha arenera en su lucha contra la naciente burguesía ligada al FMLN. A todas luces la rancia clase dominante y su partido ARENA buscan romper la hegemonía del FMLN en la Asamblea Legislativa, y si para ello tiene que abrir los espacios a los candidatos independientes lo hará, ya que sus antiguos aliados de los partidos floreros en ocasiones le han traicionado.

La evidente estrategia de la derecha representada en Arena

La derecha tradicional Salvadoreña se prepara para recuperarse de la pérdida del poder en los anteriores periodos,

recuperación que le permitirá el control legislativo, así como en las municipalidades. Tanto el FMLN, como el partido ARENA, siendo las principales fuerzas políticas se disputan el poder con el voto fraccionado. Arena busca consolidar a sus jóvenes políticos, y es de esta manera como muestra a sus diputados como la opción de votar por simpatía, o carisma entre los votantes.



Luchemos por una verdadera democratización del sistema electoral

Desde que la derecha arenera perdió el Ejecutivo, la Sala de lo Constitucional ha mantenido una cruzada por la democratización del sistema electoral. Parte de ello han sido una serie de resoluciones mediante las cuales se han declarado inconstitucionales ciertos artículos del Código electoral, permitiendo así candidaturas independientes no partidarias, voto por rostro, concejos pluralistas, voto cruzado, igualdad de candidatos no partidarios.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) considera que estas resoluciones, aunque parecen democratizadoras, en esencia mantienen el antidemocrático sistema electoral, cambian algo para que todo siga igual. Contario a supeditar la lucha a la vía electoral, llamamos a luchar por una verdadera democratización del sistema electoral y se cambie la antidemocrática y reaccionaria constitución de 1983. ■

ANIVERSARIO DE SUASESINATO: HONOR Y GLORIA CAMARADA MARVÍN RAMOS

Hace un año, el día 18 de noviembre del 2013, fue asesinado el camarada Marvín Alexander Ramos Rivera, miembro fundador de la sección salvadoreña del Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), destacado luchador y defensor de los derechos de los pueblos originarios, miembro de la Asociación de Consejos de Pueblos originario de Cuzcátan (ACOPOC). El trabajo realizado por el camarada Marvín Ramos siempre es recordado en las diferentes actividades realizadas por las organizaciones en las cuales militaba, es así como un día del Octavo Festival Yulcuicat (Canto del Corazón) fue dedicado a sus memoria.

Comprometidos en la lucha contra el capitalismo y el imperialismo

Recordamos y lloramos la muerte de un amigo, hermano, camarada y compartimos el dolor de su muerte a la vez que le rendimos homenaje. Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llamamos a la militancia, simpatizantes, amigos a mantener el compromiso revolucionario y a luchar contra el sistema capitalista e imperialista así mismo luchar por la reunificación socialista de Centroamérica.

Castigo a los asesinos!!!

Camarada Marvín Alexander Ramos Rivera, hasta la reunificación socialista de la patria Centroamericana, siempre ¡!!!



LOS VETERANOS DEL FMLN EXIGEN PRESTACIONES

Por Alberto Castro

Ex combatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, protestaron frente a las instalaciones de la empresa de capital mixto Alba Petróleos Ubicada en Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, para expresar sus exigencias hacia dicha empresa y hacia el gobierno de Sánchez Cerén y del FMLN.

Criticán acomodamientos

Al respecto, Daniel Hernández, dirigente de los veteranos expresó: "Criticamos que el FMLN se haya acomodado y que forme parte de esta empresas que no tienen interés social". Así mismo dijeron que no están recibiendo los beneficios que la empresa anuncia, y señalaron la falta de interés social por parte del gobierno y de Alba Petróleos, manifestando que "los sectores vulnerables" del país, incluyen a la clase trabajadora, obrera, desempleados y sindicalistas, entre otros.

Durante la manifestación, criticaron que el país esté pagando deuda con Venezuela a través de Alba Petróleos y Petrocaribe. Dijeron que reiteran la solicitud de la aprobación de una ley que favorezca al sector. "Una cúpula del FMLN se ha hecho más rica, es indignante cómo plata que debe llegar al pueblo en proyectos sociales se lo están dando a equipos de fútbol como FAS, Alianza, eso no puede ser".

Algunas pancartas portaban consignas bastantes llamativas como: "Mal paga el diablo a quien le sirve" y "no votes por esos traidores" en alusión al apoyo que dicen no recibir de la empresa en cuestión. La sociedad Alba Petróleos tiene un patrimonio de \$7.7 millones, de

acuerdo a su balance financiero al 31 de diciembre de 2013. Sus activos ascienden a \$460 millones, pero sus deudas ascienden a un poco más de \$450 millones.

Alba Petróleos está en un hilo

Desde los inicios de la empresa ha habido muchas quejas de los trabajadores.



Hoy en día ese punto de tensión ha ido en aumento, y más aun con la incertidumbre que existe sobre el posible colapso del acuerdo energético con Petrocaribe. El conflicto interno que vive Venezuela se lleva consigo a la empresa y Alba Petróleos, que es de capital mixto, es decir producto del acuerdo comercial de Petrocaribe y un conglomerado de alcaldías, quienes asumen doblemente las consecuencias son los trabajadores, quienes por su papel en el proceso de trabajo pagan todo.

Por ello las consideraciones que toman los inversionistas siempre se han de dirigir a salvaguardar sus intereses económicos. Esto necesariamente haría posible una reducción de la dependencia absoluta del petróleo subsidiado venezolano, esto no solamente en el país, si no en los demás países miembros, debido a que su futuro es incierto, y el colapso es algo que desde el plano económico se divisa a futuro.

Estamos pues ante una situación de dependencia total del futuro de la

empresa Alba Petróleos, sus empleados y el Estado salvadoreño de la situación que vive Venezuela. Los beneficiarios del oficialismo de aquel país, a nivel nacional e internacional, están en riesgo de perder su status actual. Debemos mencionar que en sus políticas energéticas se contempla rápidamente y cada vez más la racionalización. Es de esta manera que esta empresa Transnacional ha traído efectos desfavorables al proletariado de los países que pertenecen a Petrocaribe.

Respuestas favorables para los trabajadores

Vemos las luchas de los veteranos del histórico FMLN, ligadas estrechamente a una protesta más que hacen los trabajadores a esta empresa. Sus reivindicaciones claramente deberían de ser atendidas, pero la oposición a sus demandas proviene precisamente de las personas que conforman el núcleo económico que dirige al partido en el gobierno, que antes fueron compañeros en armas y ahora parecen haberlo olvidado.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) considera que deben ser atendidas las demandas de los ex combatientes, y considera que para que la empresa ALBA sea socialmente benefactora del proletariado y sectores populares, ésta debe ser estatizada y pasar al control directo de los trabajadores. Solo de esta manera podrá llevar cobertura social a sus trabajadores, y que además se le de el respectivo subsidio a los ex combatientes y sus familias. Además que se revisen bien los acuerdos suscitados en las creación de la empresa de capital mixto y el acuerdo entre el Estado y la transnacional Venezolana, y no al pago de la deuda externa generada por este compromiso. ■

ALTO A LA REPRESIÓN EN LA UNAH

Por Maximiliano Cavalera

Más de 5 meses han pasado desde que en la Universidad Nacional Autónoma se inició la lucha en contra de la aprobación de las normas académicas. A la fecha, y en medio de la gran represión que encabeza la rectora Julieta Castellanos, es necesario sentarnos a realizar un pequeño balance sobre cómo se ha afrontado la lucha, las consecuencias políticas y la dinámica en la que estamos inmersos. Es decir, debemos ver en perspectiva lo ocurrido y al mismo tiempo, plantearnos los nuevos retos que nos imponen cada día.

La lucha contra las normas académicas

Antes que nada, es importante abordar el problema de las normas académicas, hoy relegadas al recuerdo no por la voluntad política de los estudiantes, sino debido a que la represión que ha desplegado la rectoría en contra de los estudiantes ha enfocado la lucha hacia la defensa de los mismos. Como podemos ver hoy más que nunca, las reformas académicas constituyen la materialización de una embestida mercantilista y represora en la Alma Mater. Por ende, la lucha planteada en primera instancia para evitar la aprobación y luego para derogar las reformas académicas es un mérito histórico de los compañeros y compañeras que han estado en pie de lucha.

En muchos sentidos, la lucha se ha librado de manera correcta, claro está con altos y bajos, y sobre todo tomando en cuenta que el nivel de conciencia de la mayoría de la población estudiantil, también es un reflejo de la pasividad en que está postrada la sociedad hondureña.

Los pasos por aulas, asambleas estudiantiles y movilizaciones han sido políticas correctas. Pero en la lucha de clases no siempre triunfa el que tiene políticas correctas, sino el que sabe aprovechar los tiempos y da el golpe en el momento indicado. Esa es una lección vital para el movimiento



Estudiantes procesados penalmente por las autoridades de la UNAH

estudiantil, porque en este momento los estudiantes libran una lucha contra un aparato centralizado que tiene recursos económicos y políticos que están siendo utilizados para acabar con cualquier oposición.

Nuestra realidad impone trabajar en alianzas sólidas entre los movimientos estudiantiles de todos los recintos universitarios, consolidar una agenda común de lucha, emplazar y establecer alianzas con los docentes y trabajadores universitarios, quienes son pisoteados y perseguidos por el gobierno universitario. Establecer una red logística de simpatizantes que ayuden a desarrollar nuestra agenda política. Pero sobre todo tenemos la necesidad de trabajar y consensuar puntos o reivindicaciones concretas que unifiquen la lucha de todos los estudiantes universitarios a nivel nacional. Los acontecimientos que hemos afrontado nos enseñan claramente que consignas y agendas separadas fortalecen a la rectoría y

nos vuelven vulnerables a sus ataques.

Estos puntos deben de ser abordados en concordancia con un plan de lucha articulado, discutido y aprobado tomando en cuenta los intereses de los y las estudiantes.

Violación de derechos humanos

Sin duda la rectoría, en función de imponer su agenda, ha hecho lo que ningún otro rector se ha atrevido a realizar, y es criminalizar la protesta estudiantil. Julieta Castellanos ha llamado a seis estudiantes a audiencias de descarga en Tegucigalpa. Estas audiencias fueron realizadas inconstitucionalmente, sin permitirles a los

alumnos el derecho a tener defensa legal, bajo el absurdo pretexto de no tener carnet de estudiantes. Hasta dónde ha llegado el circo montado por doña Julieta Castellanos, que no asegura institucionalmente un carnet, y por sus negligencias administrativas no permite el ejercicio un derecho fundamental.

Pero la represión de la rectora va más allá, no conforme con procesar institucionalmente a los estudiantes de Tegucigalpa, acusó a 6 estudiantes del Valle de Sula ante el ministerio público. Esta semana otros seis estudiantes han sido llamados al Ministerio Público acusados por la rectoría de dañar bienes públicos.

Todos los estudiantes estamos conscientes de que la lucha no puede estar fuera de la defensa de los estudiantes que están siendo procesados, y ahí radica la importancia de mantener las banderas democráticas elementales. ■



IMPARABLE LA OLA DE FEMICIDIOS

Por Max Luján

Ante los elevados niveles de inseguridad que flagelan sin piedad a la gran mayoría de la población hondureña, el gobierno de Juan Orlando Hernández ha sido incapaz de frenar un problema que mantiene angustiados a todos los habitantes del país. Honduras todavía no se desprende del calificativo indecoroso del país más violento del mundo. El gobierno no responde aún a la enorme necesidad del pueblo hondureño de tener seguridad, tranquilidad y un ambiente libre de asaltos, secuestros, asesinatos y todo acto que vaya en perjuicio de la ciudadanía. Los asesinatos en Honduras han llegado a niveles extremos, a tal punto de llegar a sectores menos pensados como aldeas, caseríos, barrios y colonias que tradicionalmente se les ha considerado zonas pacíficas. De igual forma no se respeta la vida de infantes, adolescentes, ancianos y sobre todo las mujeres, que últimamente están siendo víctimas de la criminalidad que impera en el país, lo cual está elevando las cifras y estadísticas de femicidios de manera alarmante en toda la nación.

Cifras escalofriantes

Un total de 3,430 niños perdieron la vida de manera violenta en los últimos cinco años, según el Boletín Sobre Violencia Contra Niñas y Niños del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS). Según el informe, solo en el 2013 se contabilizaron 722 homicidios de menores de 18 años, de estos, 502 se produjeron utilizando

arma de fuego (El heraldo 13/11/2014).

De acuerdo a las cifras de este mismo Observatorio de la Violencia, la tasa de homicidios parcial del primer semestre de 2014 es de 35.6 muertos por cada 100 mil habitantes, producto de 3,109 muertes violentas. Esto implicaría que Honduras cerraría con una tasa de homicidios



del 65.55 muertos por cada 100,000 habitantes (5,719 muertes en total) en este 2014, según lo proyectado por el Observatorio de la UNAH (El heraldo 10 /11/2014).

En el caso de los femicidios es más cruda la realidad, cada 20 horas una mujer es asesinada en Honduras. Así lo revela un informe hecho público por el titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), Roberto Herrera Cáceres. Un informe del organismo humanitario establece que en los últimos 12 años con diez meses, al menos 4,283 mujeres han perdido la vida de forma violenta (El heraldo 21/11/2014).

El gobierno de Juan Orlando Hernández de rodillas

El gobierno, por más que se empeñe en manipular cifras y controlar los medios de comunicación con el propósito

de mantener una ilusión pacifista que disminuya los ánimos del pueblo para que no se levante, por más que se empeñe en la creación de cuerpos de seguridad como Fusina, Tigres y Policía Militar, que no es más que un enmascaramiento de interés político y económico que pretende beneficiar a una élite, no así al mismo pueblo que es el único que pone los muertos a diario, por más que se empeñe, no logra solventar la crisis. Así lo demuestran las cifras de 328 mujeres asesinadas en el transcurso de este 2014.

Uno de los casos que ha estremecido a la sociedad hondureña e internacional es la muerte de la Miss Honduras Mundo María José Alvarado y su hermana Sofía Alvarado. Este caso ha desnudado una vez más al gobierno ante la opinión internacional, sobre la vulnerabilidad en la que nos encontramos todos los hondureños. El caso de las hermanas Alvarado, al igual que miles más, deja en evidencia la situación de violencia femicida generalizada y la inexistente respuesta del Estado de Honduras para prevenir, investigar y sancionar los femicidios. Muchos casos han quedado en la impunidad y nunca se esclarecen, como el caso de compañeras campesinas y de las dirigentes populares que han sido asesinadas por sicarios de manera cobarde. Estos casos el gobierno los invisibiliza y no tienen la misma cobertura en los medios de comunicación.

Ante el incremento de los femicidios en el país y la falta de judicialización de los mismos, el Partido Socialista Centroamericano llama a que nos movilizemos en contra de los asesinatos y femicidios. Condenamos al régimen que todo el tiempo trata de ligar estos casos una supuesta conducta indebida de las víctimas. ■



“ALIANZA PARA LA PROSPERIDAD”: CRISIS Y RECOMPOSICIÓN DE LOS ESTADOS DEL “TRIÁNGULO NORTE”

Por Orson Mojica

El pasado 14 de Noviembre, el marco del foro “Invirtiendo en Centroamérica: Abriendo oportunidades para el crecimiento”, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en su sede principal en Washington, los presidentes Otto Pérez Molina (Guatemala), Salvador Sánchez Cerén (El Salvador) y Juan Orlando Hernández (Honduras) presentaron de manera conjunta, ante el vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, un documento con el sugestivo título de “Lineamientos del Plan de la Alianza para la prosperidad del Triángulo Norte”.

Esta reunión es continuidad de la realizada por Barack Obama en julio de este año, con los presidentes del Triángulo Norte, a raíz de la crisis provocada por la oleada de niño migrantes procedentes de Centroamérica.

Extraña unidad de los gobiernos

Pocas veces los gobiernos de Centroamérica presentan posiciones conjuntas, siempre se han caracterizado por la fragmentación política y la abyección ante el imperialismo norteamericano. Esta reunión no fue la excepción, sino la confirmación de esta tendencia histórica, a pesar que es la primera vez que los gobiernos del Triángulo Norte, aquejados por la crisis económica y el déficit fiscal, presentan una posición unitaria en la desesperada búsqueda por obtener recursos económicos ante el amo imperialista.

La tragedia social que sacude a Centroamérica, ha obligado a los gobiernos del Triángulo Norte a asumir algunas posiciones conjuntas para evitar el colapso de las instituciones del Estado burgués en cada uno de sus países, y conseguir dinero que les permita mitigar un poco la crisis económica y la degradación que carcome a estos países.

Denominador común

Hay un denominador común en los países del Triángulo Norte: la pobreza, extrema violencia y continuas oleadas migratorias. Esto no es una casualidad, tiene un origen común. Guatemala, El Salvador y Honduras representan una trilogía de países en donde la revolución fue sofocada a sangre y fuego. La derrota de las guerrillas y las masacres, masivas

o selectivas, fueron maquilladas con aperturas democráticas controladas, durante la convulsa década de los años 80. La derrota, por un lado, y la ofensiva neoliberal que vino posteriormente, por el otro, se combinaron para agudizar las terribles condiciones de vida de las masas populares

La punta del iceberg de esta tragedia social han sido las continuas oleadas de niños migrantes que son capturados en la frontera de Estados Unidos. En realidad, los niños no viajan solos, pero el solo hecho de capturar tantos niños es un síntoma alarmante de descomposición social que el imperialismo norteamericano no ha dejado pasar de manera desapercibida y, al contrario, ha comenzado a tener una política para desinflar inminentes situaciones de violencia incontrolable y sus secuelas migratorias.

Norte y Sur dentro de Centroamérica

Las secuelas de la derrota de la revolución y la actual crisis económica ha configurado Centroamérica en dos polos, con países parecidos pero distintos: los países del Triángulo Norte, son la zona geográfica que refleja una situación de retroceso social y barbarie, mientras los países de la parte sur (Nicaragua, Costa Rica y Panamá), aunque aquejados por la crisis, representan una situación relativamente distinta al Triángulo Norte.

El caso de Nicaragua es excepcional porque, aunque sufrió directamente la ofensiva imperialista y su revolución fue derrotada, dos décadas después su economía capitalista muestra débiles signos de recuperación.

Oleadas migratorias incontenibles

El documento presentado por los presidentes del Triángulo Norte revela un dato alarmante: cerca del 9% de la población de Guatemala, El Salvador y Honduras, unas 100,000 personas, cada año migran clandestinamente hacia Estados Unidos, buscando trabajo y huyendo de la violencia: “Hasta el 31 de agosto de este año, 50,303 niños procedentes de nuestros tres países han sido detenidos en la frontera de los EEUU, superando en más de 15 veces la cifra de 2009 (...) De acuerdo a American Community Survey (Census Bureau), los migrantes de El Salvador alcanzan 1.3 millones mientras que los guatemaltecos rondan casi 900 mil y los hondureños 536

mil”.

El alto índice migratorio refleja la desintegración de los países del Triángulo Norte. El caso más trágico se concentra en El Salvador, un país que ha tenido una constante y ascendente sangría migratoria desde los años 80.

Con mucha preocupación, los presidentes del Triángulo Norte han abandonado sus diferencias ideológicas para concluir que: “La intensidad de los problemas que vivimos hoy será mayor mañana si no acortamos los tiempos para obtener resultados concretos que signifiquen mejoras reales en las perspectivas de empleo, ingresos y bienestar social en nuestros países”.

Problemas estructurales del capitalismo semicolonial

Los presidentes del Triángulo Norte han concluido que los problemas a resolver son los siguientes: “(...) La falta de oportunidades de empleo, la violencia y la reunificación familiar han sido las principales razones para emigrar de nuestra región. (...) El modesto crecimiento de la región ha limitado las oportunidades para la población. (...) El bajo crecimiento ha conllevado a una tímida reducción de la pobreza y la desigualdad. (...) Una escasa formación de capital y economías concentradas en actividades productivas de escaso valor agregado han mermado nuestro potencial de crecimiento (...)”.

Pareciera que estamos ante una crítica de las consecuencias de la ofensiva neoliberal, pero no es así. Lo que han hecho los presidentes del Triángulo Norte es describir tímidamente la realidad económica y social de nuestros países, cuyas economías se han degradado después de la derrota de la revolución en 1990-1992.

Los presidentes reconocen que las escasas inversiones extranjeras en los países del Triángulo Norte se concentran en actividades de “poco valor agregado”, lo que acentúa la pobreza. Un dato alarmante es que más del 50% de la Población Económicamente Activa (PEA) se concentra en la agricultura y el comercio, mientras que menos del 15% se dedica a la industria manufacturera: “(...) Nuestras economías se caracterizan por un alto nivel informalidad. Tanto en El Salvador (71%), como en Guatemala (81%) y Honduras (84%) la misma supera el promedio de Centroamérica (65%) (...) Los jóvenes desempleados representan



una gran proporción del desempleo total. En Guatemala y Honduras, constituyen más de la mitad de todos los desempleados, mientras que en El Salvador son más del 40%. La proporción de jóvenes que ni estudian ni trabajan (ninis) en nuestros países es la más alta de Latinoamérica, alcanzando niveles cercanos al 30% (...) En 2013, la tasa de subempleo visible en El Salvador alcanzó casi 30% mientras que en Guatemala y Honduras se aproximó al 15% y 12%, respectivamente. (...) En El Salvador el 70% de la población tiene acceso a instalaciones de saneamiento, comparado con el 82% en América Latina. En Guatemala y Honduras alrededor del 18% de la población carece de acceso a electricidad, comparado con 5% en América Latina”.

Esta confesión de los presidentes del Triángulo Norte confirma que el caso más grave de decadencia social está concentrado en El Salvador. No es una casualidad, pues, que el problema de las maras en ese país refleje un fenómeno con profundas raíces sociales, que no puede ser erradicado mientras no cambian las circunstancias que lo originaron.

La imparable violencia

Este es el contexto de decadencia económica y social que permite el florecimiento de la violencia, convirtiendo a los países del Triángulo Norte en la zona más violenta del mundo: “(...) En el Triángulo Norte tenemos una tasa de violencia superior al promedio de Centroamérica y de América Latina, siendo particularmente elevada en Honduras. En 2012, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes fue 90 en Honduras, mientras que en Guatemala alcanzó 40 y en El Salvador 41, superiores al promedio regional de 25.24 En 2013, tuvimos 14,300 homicidios, de los cuales más del 90% se localizaron en los municipios con mayor emigración”.

Estos datos no son nuevos, pero en boca de los presidentes del Triángulo Norte es una reafirmación de la justeza de nuestras críticas al capitalismo semicolonial.

El déficit fiscal

El último componente de este drama social es el omnipresente déficit fiscal. Para 2013 Guatemala tenía un déficit fiscal de 2.07 de su PIB, Honduras tiene 3.50 y El Salvador es el más alto con 4.04. El déficit fiscal está asociado al endeudamiento público creciente. Para 2013 la deuda pública de Guatemala representaba el 24,4 del PIB, para Honduras representaba el 40.2% y para El Salvador representaba el 54.9% del PIB.

Lo que no dicen los presidentes del Triángulo Norte es que la falta de ingresos

en el presupuesto se debe al efecto de los tratados de libre comercio y al hecho que las grandes empresas nacionales y extranjeras tiene exenciones fiscales casi permanentes, quedando el peso de los impuestos sobre la clase media y los sectores populares, lo que resulta insuficiente para sostener los gastos mínimos del Estado.

Más entrega al imperialismo: zonas económicas especiales

Como conclusión, los presidentes del Triángulo Norte se han impuesto una serie de medidas a tomar como la promoción de la inversión extranjera, que no es otra cosa que la entrega de los recursos naturales y la explotación de la mano de obra semi esclava.

Llama la atención que los presidentes del Triángulo Norte se han comprometido a impulsar “la creación de zonas económicas especiales en donde se les brindará un tratamiento diferenciado a nuevas inversiones”, retomando la experiencia que impulsó Juan Orlando Hernández, cuando fue presidente del Congreso Nacional de Honduras, creando las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).

Otto Pérez Molina y Juan Orlando Hernández representan sectores de la burguesía en Guatemala y Honduras, pero la posición de Salvador Sánchez Cerén, un ex guerrillero que dice ser de izquierda, es realmente vergonzosa. El gobierno del FMLN en El Salvador acepta este planteamiento de crear “zonas económicas especiales” dando un salto de calidad en su arrodillamiento ante el imperialismo norteamericano y las transnacionales.

Medardo González, Secretario General del FMLN, guardó silencio en torno al tema de las “zonas económicas especiales”, pero declaró que el FMLN apoyaba el planteamiento conjunto de los presidentes del Triángulo Norte, en su apuesta por “fortalecer la economía y consolidar las instituciones y trabajar en el terreno de la seguridad pública y generar que haya menos inmigración.” (La verdad digital.com, 17/11/2014).

En su documento, los presidentes del Triángulo Norte retomaron el viejo planteamiento de agilizar el comercio, incluyendo una mayor movilidad de los trabajadores de estos países, lo que indica que buscan que las altas tasas de desempleo abierto incidan en la reducción de salarios, como una forma de atraer a las transnacionales.

Objetivo central: Fortalecimiento y coordinación de las policías

Para lograr una mayor “seguridad ciudadana” los presidentes del Triángulo

Norte se han comprometido a impulsar un plan de fortalecimiento y coordinación de las fuerzas policiales: “(...) fortalecer las capacidades de gestión de las fuerzas policiales, incluyendo formación, capacitación, profesionalización y equipamiento, sistemas de información para prevenir y combatir el delito y a su vez promover su acercamiento a la comunidad, incluyendo sólidos mecanismos de rendición de cuentas que mejoren la percepción y la confianza ciudadanía. (...) A nivel regional, se buscará la mayor sinergia posible en formación policial, centros de referencia de información de violencias y delitos, banco de experiencias de los tres países en materia de prevención y control del delito, entre otros”

Detrás del palabrerío sobre la “seguridad ciudadana” se esconde el objetivo real de fortalecer, no a los ejércitos, sino a los aparatos policiales por ser éstos quienes están al frente de la represión y de la imposición del orden. Para camuflar este objetivo central, también se proponen modernizar el sistema de tribunales de justicia, para darle una cobertura jurídica al proceso de revitalización de las desprestigiadas e inoperantes instituciones del Estado.

El optimismo de Biden

La conclusión es obvia: como pordioseros los gobiernos del Triángulo Norte piden ayuda económica a Estados Unidos, a través del BID. Para justificar la necesidad de apoyo económico, estos gobiernos han tenido que plantear parcialmente la dramática realidad social de esos países condenados a la barbarie.

El vice presidente Joe Biden ha mostrado sus reticencias con una mezcla de moderado optimismo: “Siempre que haya voluntad política (en Honduras, Guatemala y El Salvador), Estados Unidos estará preparado para trabajar con estos países para lograr avances que beneficiarán a todo el hemisferio (...) Yo no veo ninguna razón por la cual Centroamérica no puede convertirse en la gran historia de éxito futuro en el hemisferio (...) Pero ninguna cantidad de asistencia financiera va a resolver este problema. El ingrediente clave no es el dinero, sino la voluntad política para tomar algunas decisiones extremadamente difíciles en esos países.” (La Nación, 15/11/2014).

No hay duda que el imperialismo norteamericano está muy preocupado por la descomposición social de los países del Triángulo Norte, pero ello no implica que tirará el dinero. Al contrario, el Plan “Alianza para la Prosperidad” demuestra que el imperialismo norteamericano quiere dirigir sin intermediarios el proceso de recomposición del Estado burgués en los países del Triángulo Norte. ■



EL PERMANENTE ATAQUE A LOS SALARIOS Y EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO

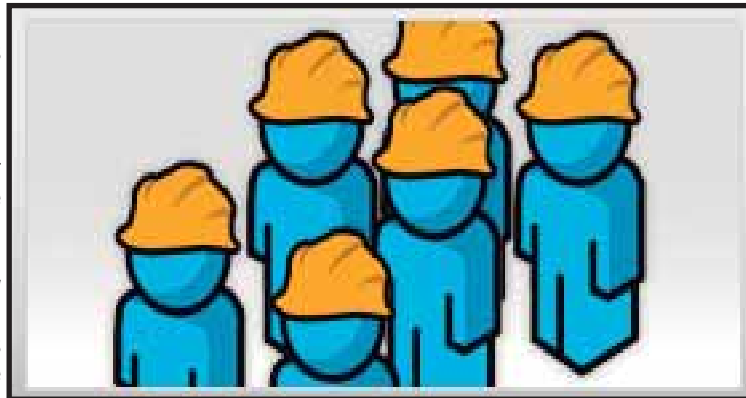
Por Francisco Quesada

Desde hace varios años, la jauría neoliberal, encabezada por el periódico La Nación y sus plumíferos a sueldo, las cámaras empresariales y los demás sectores neoliberales, desarrollan una campaña despreciable y sistemática en contra de las condiciones de vida, salarios y empleo, de los trabajadores del sector público. El objetivo de semejante campaña es reducir los salarios, mediante la eliminación de anualidades, dedicación exclusiva, carrera profesional y otros incentivos, así como eliminar las conquistas económicas y sociales incorporadas en las convenciones colectivas y el despido masivo de los trabajadores del sector público. El pretexto para orquestar semejante campaña contra los trabajadores es acusarlos de ser los causantes del déficit fiscal. El amplio debate sobre el presupuesto de la República para el año 2015 busca en el fondo reducir los supuestos disparadores del gasto público, los salarios y pensiones.

El gobierno de Solís, demostrando su carácter cada vez más neoliberal, se comprometió con la misión del FMI que vino a supervisar el comportamiento económico y social de Costa Rica a "moderar" los incrementos de los salarios de los empleados públicos. Este compromiso consiste en que "El Gobierno planteó al Fondo Monetario Internacional (FMI) un plan fiscal que incluye una moderación en los aumentos salariales de empleados públicos en los próximos cuatro años. Tal moderación implica que el alza del salario total, incluidos beneficios extra o pluses, no sobrepasarán la inflación." (La Nación, 11/11/14). Se supone que la política salarial que se implementa en el sector público debe ser "discutida y aprobada" en el seno de la Comisión Nacional de Salarios, integrada por el gobierno, empresarios y sindicatos, sin embargo, como se puede observar, esa política salarial "nacional" fue acordada entre el FMI y el gobierno.

Continuando con los ataques en contra de los salarios y el empleo público, el periódico La Nación, en un editorial

reciente, sostiene que "Las convenciones colectivas del sector público reescriben el Código de Trabajo para ampliar los derechos de sus beneficios al punto de crear una clase privilegiada con fondos públicos..." (La Nación, 21/11/14). Es importante señalar que actualmente existen 77 convenciones colectivas vigentes en diferentes instituciones estatales, ministerios, instituciones autónomas y empresas públicas. Estas cobijan a unos 124 mil empleados públicos. En los últimos meses, varias instituciones y empresas públicas, tales como Japdeva, Recope, CNFL, la universidad UNA y otras, están denunciando las convenciones colectivas con el propósito claro de cortar los denominados pluses salariales de sus empleados. Es más, la Universidad Nacional (UNA), en una posición reaccionaria y anti-obrera, recientemente introdujo ante la Sala Constitucional una acción de inconstitucionalidad contra un



artículo de la convención colectiva para eliminar el pago de las horas extras a sus empleados. Es necesario señalar que la hora extra en esa institución se paga doble y no a medio tiempo como señala el código del trabajo. Sin embargo, es importante mencionar que en realidad ese pago no es "irracional", como lo señalan las autoridades universitarias y La Nación, ya que incluso en algunas empresas privadas como HP la hora extra se paga doble, tal como debe ser.

Este ataque masivo y generalizado en contra de las convenciones colectivas es dirigido desde el despacho del mismo Presidente de la República. Según La Nación "La inusual actividad en torno a las convenciones colectivas responde, en buena parte, a una directriz del

presidente, Luis Guillermo Solís, emitida en septiembre, para exigir la revisión de los acuerdos vigentes en 20 instituciones públicas." (Ídem). Ningún gobierno neoliberal del PLN o del PUSC se había atrevido a realizar de forma tan masiva la revisión y, eventual, eliminación de las conquistas salariales, llamadas por los neoliberales como "abusos", contempladas en las convenciones colectivas de los trabajadores del sector público.

El gobierno de Solís constituye la más peligrosa amenaza en contra de los trabajadores del sector público. La credibilidad y legitimidad del gobierno, ganada en su amplia victoria electoral, aunque ha comenzado a deteriorarse rápidamente, lo ha animado a reprimir los movimientos huelguísticos, tal como ocurrió con la huelga de Sintrajap, así como a lanzar una fuerte ofensiva en contra de las convenciones colectivas de los trabajadores del sector público.

De ahí que, entre las recomendaciones de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), se encuentra la siguiente: "La misión insta al Gobierno a aprovechar su capital político para iniciar el proceso de reforma (fiscal) temprano en su mandato." (La Nación, 11/11/14). Precisamente, aprovechando ese "capital político", el gobierno está intentando realizar lo que ningún gobierno neoliberal

se había atrevido a realizar: hacer reajustes salariales sobre el salario total, eliminar las conquistas de los trabajadores en las convenciones colectivas, hacer la reforma fiscal y la ley de empleo público.

Emplazamos a los bloques sindicales de Patria Justa y BUSSCO a convocar a un encuentro nacional de todas las organizaciones sindicales, sociales, populares y estudiantiles para discutir la situación nacional y votar un plan de lucha que enfrente y derrote la ofensiva del gobierno de Solís en contra de los trabajadores del sector público. Este es el momento de actuar, ya que después puede ser demasiado tarde.

